

*Gino Costa, viceministro de Fernando Rospigliosi en el 2001 y sucesor de este un año después, nos cuenta en un testimonio de parte su llegada al ministerio, los desafíos que encontró y cómo les hizo frente.*

*La clara posición de esta revista a favor de las gestiones de Fernando Rospigliosi y Gino Costa, tal como ustedes lo deben haber notado desde hace un buen tiempo, no responde a que se trate de personas cercanas a nosotros, sino a que ambos han demostrado que se puede ser eficaz en un sector complicado como Interior con métodos democráticos y respetuosos de los derechos humanos.*

# Mirada desde el Interior

## gino costa santolalla

Ex ministro del Interior. Actualmente investigador del IDL.

**C**uando Fernando Rospigliosi me invitó a trabajar a Interior, casi no lo conocía. Sabía que había estado en la Católica a principios de los setenta, un poco antes que yo, y que venía de la izquierda. Estaba enterado de su apoyo a Vargas Llosa en el noventa y de su terca, valiente y por momentos casi solitaria oposición a Fujimori y Montesinos.

Fui asiduo lector de su columna semanal en *Caretas*. En 1997 estuve con él en una conferencia sobre seguridad en Santiago de Chile, adonde fuimos en representación del IDL a hablar de inteligencia él, de reforma policial yo. Parco, seco, de pocos amigos, casi no conversamos. Después me entrevistó varias veces telefónicamente para el programa de radio de Aprodeh sobre el trabajo de la Comisión Ad-Hoc.

Pocos días antes de la asunción de mando por Toledo me lo encontré en Las Brisas del Titicaca en una fiesta organizada por el cuerpo diplomático a quienes habíamos integrado el gobierno de transición. Yo era todavía presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), pero ya había decidido irme porque sabía que Fernando

Olivera iba a Justicia. Ese día se había voceado a Rospigliosi como sucesor de Ketín Vidal en Interior. Lo vi de lejos, me acerqué, lo saludé y le pregunté si la noticia era cierta. Me dijo que no sabía nada, que al igual que todos no tenía idea. Faltaban pocos días para el cambio de mando y el presidente Toledo aún no tenía su



gabinete listo. Había desperdiciado seis valiosísimas semanas desde su triunfo en segunda vuelta.

Yo sabía que Rospigliosi quería ir a Defensa, pero terminó en Interior, lo que inicialmente consideró un premio consuelo, quizá sin saber entonces que en democracia constituía el nervio central del poder, el ministerio encargado de asegurar la gobernabilidad del país. Durante los años de Fujimori, Defensa cumplió ese rol, al que Interior quedó subordinado, con el SIN como gran cabeza del sistema y con Montesinos como su director de orquesta. Ahora Interior debía ocupar el espacio que le correspondía, como el verdadero ministerio de gobierno.

Apenas recibió el encargo de Toledo me llamó para conversar en Petroperú. Era el 26 de julio y tenía poco tiempo para armar su equipo. Le agradecí y acepté su invitación. Me dijo que aun cuando el Presidente le había dado plena libertad, lo tendría que consultar con él. Esa noche, en reunión de trabajo con el equipo de Olivera, este, en diálogo apresurado, me dijo que quería que me quedara en el Inpe. Le dije que lo conversáramos con tranquilidad. Después supe que llevó la propuesta de mi nombramiento al Presidente, al igual que Rospigliosi. Toledo respaldó a Rospigliosi y al día siguiente estaba en Interior. La única vez que había estado en el Despacho Ministerial fue en 1980, cuando ejercía el cargo don José María de la Jara y Ureta.

Recuerdo el día de mi juramentación veintiún años después:



Fernando y yo éramos los únicos civiles; estaban, además de mis padres, mis hijas y algunos familiares. También asistió Carlos Basombrío, que unas semanas después sería el tercero del equipo. Salvo nosotros, toda la sala estaba llena de uniformados, generales y coroneles de la Policía. Durante los noventa el ministerio se había militarizado con Briones y luego, a partir de 1997, policializado con Dianderas, Hurtado Esquerre y Ketín Vidal.

Este último dejaba un legado nada desdeñable. Había capturado a Montesinos, iniciado la depuración del cuerpo de oficiales de la gente vinculada a la mafia y, con el concurso del general Danilo Guevara, Juan Briceño y otros, preparado un importante documento: "Bases para la reforma policial". Aun así, la tarea pendiente era inmensa. Había que hacer realidad la reforma policial para devolverle credibilidad y legitimidad a la institución después de la manipulación y corrupción de la que había sido objeto y ponerla a la altura de los

desafíos del siglo XXI. Al mismo tiempo, era preciso mejorar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y acabar con los remanentes del terrorismo. Teníamos que demostrar que eran posibles el orden y la seguridad en democracia. Había que actuar simultáneamente en todos los frentes, porque sin reforma no tendríamos una Policía más eficiente, y sin un adecuado control operativo no solo no habría reforma sino tampoco, eventualmente, gobierno.

No contábamos para ello con el control de los medios, nacionales y locales, que sí tuvieron Fujimori y Montesinos. Al contrario, teníamos a buena parte de ellos abiertamente en contra, controlados por procesados o prófugos de la justicia, decididos a echarse abajo al régimen. Tampoco contábamos con el control de otras instituciones del Estado, que sí tuvieron ellos. Más importante aún: no teníamos la capacidad de chantaje y extorsión que les permitía, con estas armas vedadas, mantener el país relativamente quieto. Los equipos de interceptación

telefónica y las bases de datos habían quedado en su poder. Si a esto se le sumaba el hecho de que habría inevitablemente un desembalse de expectativas, contenidas durante el régimen de Fujimori y alentadas simultáneamente por cuatro años de recesión y por dos sucesivos procesos electorales, teníamos todos los ingredientes de un escenario socialmente explosivo. Para hacerle frente carecíamos de los instrumentos de control democrático necesarios, de manera que debíamos construirlos.

A ello había que sumar las debilidades de la propia conducción de Toledo, que para Rospigliosi ya eran claras desde el primer día que conversamos, y la precariedad de la mayoría parlamentaria con que se contaba, así como su singularísima composición. Con frecuencia y con razón constatamos lo mal que andamos. Considerando las circunstancias, parece sorprendente que en casi tres años la cosa no haya ido peor. Creo que Rospigliosi y su equipo han tenido mucho que ver con ello. Por eso quienes finalmente le han bajado el dedo a este gobierno apuntaron sus baterías contra él, para acelerar la agonía. Por eso su salida es especialmente preocupante.

Aunque éramos conscientes de nuestra amplísima gama de responsabilidades, llegamos con nuestras prioridades, como debe ser: reforma policial y seguridad ciudadana, sin descuidar por supuesto el esfuerzo por desarticular a la mafia. Rápidamente aprendimos que en Interior es imprescindible tener una agenda, sobre todo porque los

acontecimientos están permanentemente imponiéndole a uno la suya. A menos de una semana de haber llegado cayeron cuatro policías en un sorpresivo enfrentamiento con Sendero en la margen izquierda del río Ene. Sus cadáveres fueron partidos en pedazos, a hachazos. La noticia nos congeló: los errores en Interior se pagaban con vidas humanas. Buena parte de la prensa se apresuró a concluir que esto confirmaba el rebrote terrorista. ¡La democracia estaba demostrando nuevamente su debilidad!

La única manera de rescatar a los heridos y al resto de la patrulla, cuya presencia en la zona desconocíamos, como la desconocía también Defensa, era con el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque la Policía no contaba entonces con helicópteros artillados. Los comandantes generales hicieron sentir su malestar y colaboraron a regañadientes. Rospigliosi suspendió indefinidamente las operaciones policiales antiterroristas; había que asegurar el involucramiento de las Fuerzas Armadas, que tenían presencia en la zona desde hacía muchos años, experiencia de combate y equipo adecuado. Pero estas no querían participar: se había levantado el estado de emergencia y la responsabilidad de la seguridad interna recaía ahora exclusivamente en la Policía. Además, sostenían que se les había recortado el presupuesto, que no tenían plata para operar y que, encima, se les estaba pasando la factura por haber derrotado a Sendero.

No sería tan fácil derrotar a Sendero ni manejar la relación

con las Fuerzas Armadas. Desde los medios, quienes no querían que perdiesen poder alentaban la teoría del rebrote, en muchos casos distorsionando burdamente la realidad. Tardamos algún tiempo en diseñar una nueva estrategia que le diera a la Policía el rol protagónico. En reemplazo de los Comandos Político-Militares se crearon los Comisionados para la Paz, que fueron nuestro nexo con la población, y los Comités de Autodefensa; se restableció la ley de arrepentimiento; se creó un sistema de recompensas; se trabajó con Foncodes; se repotenció la Dircote; y un año después se reiniciaron las operaciones policiales, esta vez helitransportadas, en la retaguardia de los remanentes.

Esto nos permitió mantener la iniciativa. Con el ingreso de Sanabria la perdimos y las Fuerzas Armadas terminaron no solo a cargo de la lucha antiterrorista sino también del orden público, con emergencia y presupuesto adicional, tal como lo exigieron desde el principio. Literalmente con el gobierno en sus manos. Pero ello no trajo la derrota de Sendero y sí ocho soldados muertos en combate. Se requirió del regreso de Rospigliosi a Interior para corregir esta situación, que podría volver a presentarse con Reátegui, con la diferencia de que la coyuntura social y política es ahora más complicada.

Pero la declaratoria de emergencia con Sanabria no tuvo que ver con Sendero, sino con el bloqueo de la red vial nacional,



es decir, con un problema de orden público, al igual que en Arequipa. Esta era la otra responsabilidad operativa que no estaba entre nuestras prioridades, pero que pasó a ser la primera. Al igual que la muerte de los cuatro policías, nos sorprendió la rapidez y la fuerza con que tuvo lugar el desembalse de expectativas, pero sobre todo su carácter crecientemente violento y en algunos casos arbitrario. Los despedidos del sector público se consideraron con todo derecho a regresar a sus puestos de trabajo diez años después, y para lograrlo se encargaron de armar todo tipo de despelotes en el centro de Lima, un día sí y el otro también. Si la resistencia contra Fujimori había sido pacífica, ¿por qué la protesta social en democracia se hizo tan violenta? Y ¿cómo había que encararla?

Primero, como lo que era, es decir, un problema principalmente político y social, lo que demandaba buena y oportuna información y un sistema interministerial de coordinación y manejo de conflictos. Segun-

do, fortaleciendo nuestra capacidad de actuar con operadores políticos en el terreno, para ayudar a la resolución pacífica de aquellos, con el respaldo de un equipo de comunicadores sociales y de procuradores. Los primeros para enfrentar a los incendiarios con un mensaje de prudencia, razonabilidad y firmeza, y los segundos para recoger las evidencias para que el Poder Judicial procesara y condenara a los violentos y los vándalos. En este último extremo, poco ayudaron al Estado de derecho nuestras anquilosadas instituciones fiscales y judiciales, que con su inacción alimentaron, seguramente sin quererlo, la violencia. Tercero, todo lo anterior debía ser complementado con el despliegue rápido y oportuno de la fuerza pública a las zonas de conflicto. La pata coja en el manejo de conflictos fue Gobierno Interior, pues en virtud de un acuerdo entre Toledo y Rospigliosi, este fue manejado por y para el partido, ignorando la importante función preventiva que deben cumplir las autoridades. Este error le ha

costado y le sigue costando caro al gobierno y ha sido un pesado déficit con el que tuvimos que trabajar. No obstante lo anterior, la metodología desarrollada fue la correcta; funcionó en casi todos los casos, pero no es perfecta, y en llave no pudo impedir la tragedia.

Al igual que en orden público y lucha antiterrorista, en seguridad ciudadana también se sentaron sólidas bases para nuevas e imaginativas políticas que, a pesar de carecer del necesario respaldo presupuestal, quedan como un legado importante, con frutos que mostrar, al igual que todo lo hecho y avanzado en la propia modernización institucional. La pena, sin embargo, es que los avances no son irreversibles, como lo demostró la gestión de Alberto Sanabria. Más triste aún, que la falta de respaldo efectivo a Rospigliosi, mientras era hostilizado desde dentro, haya hecho imposible que el gobierno encuentre un independiente competente dispuesto a seguir su camino. ■